

FILOMENO V. AGUILAR, JR.*

**LUCHAS POR LAS TIERRAS EN ASIA:
PERSPECTIVA DE CONTEXTOS
SELECCIONADOS**

ALGUNOS DE LOS EPISODIOS MÁS DRAMÁTICOS de la redistribución de tierras en el siglo XX fueron presenciados en Asia. Sin embargo, grandes disparidades de acceso a la tierra continúan saturando su expansión. Las luchas por la propiedad, el control y la posesión de tierras agrarias o rurales continúan realizándose en muchos lugares, pero últimamente no han recibido atención regional, mucho menos a nivel global. El fin de la Guerra Fría, junto con la expansión del naciente industrialismo en muchos lugares, ha borrado el intenso contexto ideológico de movimientos anteriores para conseguir tierras para los desposeídos. A pesar de esta situación, en medio de la globalización y la influencia de las estrategias neoliberales, las luchas por las tierras persisten en variados trasfondos; algunos de ellos son específicos del tardío siglo XX, como el colapso de la agricultura colectivizada, mientras otros son extensiones lógicas por expandir y profundizar programas previos de reforma agraria, iniciados bajo la tutela del desarrollismo estatal (ver Bernstein, 2002).

* Filomeno Aguilar, Jr. es profesor en el Departamento de Historia y Director del Instituto de Cultura Filipina, Ateneo de la Universidad de Manila. Es el editor de *Philippine Studies*. Trabaja sobre las construcciones de nacionalidades, migraciones globales, cultura política y relaciones de clase sociales. Es el autor de *Clash of Spirits: The History of Power and Sugar Planter Hegemony on a Visayan Island* (1998) [*Choque de espíritus: la historia del poder y la hegemonía de un hacendado azucarero en una isla Visayan*].

Dada la diversidad y la extensión geográfica del área en discusión y mi limitada especialización, este trabajo no aspira a brindar una visión totalizadora. Sólo abarca ciertas clases de luchas contemporáneas por la tierra, y este enfoque intenta elaborar una cuadrícula clasificatoria básica. Para propósitos heurísticos, estas luchas pueden ser entendidas de acuerdo con los siguientes factores: como movimientos organizados con líderes y emprendedores políticos, o como acciones espontáneas; pueden ejecutarse tanto a través de mecanismos estatales, o fuera de ellos, como a través del mercado de tierras, formal o informal; poseer una orientación contra entidades hegemónicas o poco hegemónicas, como el Estado y las clases, actores o grupos sociales. Un caso de lucha por la tierra puede ser caracterizado por una combinación de cualquiera de estos factores. El enfoque es consecuente con lo que postula la introducción de este libro: que el compromiso político de los campesinos es sumamente variado en cualquier momento y a través del tiempo. En todos los casos, sin embargo, el énfasis reside en la acción directa sobre la tierra por medio de iniciativas que, a pesar de sus múltiples y diversos impulsos, así como de sus ramificaciones, provienen en su mayoría de la población rural. Se trata de luchas caracterizadas por el objetivo de adquirir una porción de tierra cultivable y, donde ésta ha sido denegada, del derecho a controlar la producción y su venta.

OCUPACIONES DE TIERRAS: DESPLAZÁNDOSE HACIA LAS TIERRAS ALTAS

En la misma línea que James Scott (1985) ha llamado la atención sobre formas de resistencia cotidianas, advirtiéndonos sobre la existencia de eventos que difieren de las acciones de protesta organizadas y de las revoluciones, el primer lugar para buscar luchas de campesinos por la tierra y su ocupación es en las acciones diarias, espontáneas, de los campesinos que buscan reclamar tierras en áreas que son consideradas legalmente como zonas boscosas o subsumidas por el Estado como de su dominio exclusivo. Los reclamos efectivos de zonas boscosas mayormente realizados por individuos o pequeños grupos son llevados a cabo y reafirmados probablemente todos los días, aunque tales acciones espontáneas son del tipo de las que evaden la vigilancia oficial. Los intereses capitalistas corporativos obtienen acceso a grandes extensiones de tierras públicas, pero tales operaciones son generalmente legitimadas con medidas legales, tanto a través de permisos mineros o concesiones madereras como de un discurso científico de conservación de dudosos resultados (Cooke, 1999). La masiva, calma e inesperada ocupación de terrenos en tierras altas por los pobres rurales marginalizados que, como agregado, ha producido un floreciente sector, se produce fuera del Estado y se torna, así, una forma de desafío al poder estatal. La expansión de una gran población, principalmente en tierras altas, ha sido culpada de haber

generado una profunda deforestación debido a las prácticas alternantes de cultivos, lo cual es una afirmación altamente discutible. Pero en razón de que los Estados son incapaces de sacar el creciente número de ocupantes de las tierras altas, se han visto obligados, desde 1980, a aceptar su presencia y a recurrir a la “regulación” de sus prácticas agrícolas. Debido al vínculo causal entre la tenencia segura y la conservación de los recursos naturales, los Estados han empezado, incluso, a crear varias formas de instrumentos legales que reconocen los derechos de permanencia de los cultivadores de tierras altas. De ahí la popularidad de la llamada gestión comunitaria de zonas boscosas (Poffenberger, 1999).

Aunque no existen estadísticas precisas, los números sugieren que la ocupación masiva de tierras ha tenido lugar en las tierras altas. Por ejemplo, en las Filipinas, el total de la población en zonas boscosas (definidas como tierras con declives mayores al 18%, sin tener en cuenta, en realidad, la extensión del bosque) fue estimada en alrededor de 14,4 millones de personas en 1980, cifra que aumentó a 17,8 millones en 1988; durante el mismo período, la población migrante en áreas de tierra alta fue estimada en un aumento de 1,9 millones en 1980 a 2,6 millones en 1988 (Cruz-Zosa-Feranil y Goce, 1988: 18-19). Estas estimaciones han sido actualizadas y el total de población de tierras altas ha sido ubicado, aproximadamente, en 24 millones en 2000, casi el 31% del total de la población del país (Beasca y Borrero, 2003). Como subrayan Beasca y Borrero (2003: 1), el rango de crecimiento anual de la población de las tierras altas en las Filipinas entre 1995 y 2000 fue de un 2,5%, lo que sobrepasó el rango nacional de incremento de población en un 2,3% durante el mismo período. En el norte de Tailandia, la población de las zonas montañosas fue establecida en 272.568 en 1972; para el período 1985-1987 el número había aumentado a 495.353, y para 1991 la cifra había saltado a 749.353 (Kanok, 1996). Mientras que el rango de crecimiento anual de la población de toda Tailandia fue de alrededor del 1,1%, la población de la zona montañosa en la región norte creció en un 6% anual desde 1986 hasta 1991 (Kanok, 1996). Para 1995, el total de la población de tierras altas de Tailandia fue establecido en 10 millones; el estimado para Vietnam era de 25 millones, y de 60 millones para Indonesia (Poffenberger, 1999: 36).

Evidentemente, el gran incremento de la población de las zonas altas del sudeste de Asia no puede considerarse sólo en relación con el aumento “natural” a causa de patrones existentes de fertilidad. En todo caso, los incrementos demográficos anuales, más altos que el promedio, se elevaron por la creciente cantidad de campesinos que se han desplazado hacia arriba en busca de tierra cultivable para la subsistencia básica y el comercio. En algunas áreas no es difícil imaginar una competencia intensificada entre quienes reclaman las tierras. Un ejemplo de esta cuestión son las regiones centrales y el oeste de las Filipinas, donde se han registrado las densidades

poblacionales más altas del país –dos o tres veces mayores que la densidad de población nacional de 1,9 personas por hectárea registrada para los bosques–, como sugiere un estudio del Banco Mundial (World Bank, 1989). En esas circunstancias, incluso la cantidad de tierras cultivables y “abiertas” a la ocupación ha ido disminuyendo, y los campesinos que reclaman tierras deben competir cada vez más entre ellos por cualquier terreno que puedan encontrar en un medio ambiente tan frágil.

Hay varias razones para la migración ascendente de campesinos sin tierra o casi sin tierra, cuyo número se agrega al de las comunidades nativas con una larga trayectoria de asentamientos en regiones altas. Para quienes se trasladan de las tierras bajas hacia las tierras altas, la ocupación y adquisición de un pedazo de tierra dentro de la propiedad estatal puede ser vista como una defensa contra la miseria, contra la pérdida de tierras de cultivo o ante el colapso del campesinado rural o del sistema de producción de pequeñas mercancías en las tierras bajas. Dada la creciente densidad de población y congestión en las tierras bajas, aquellos campesinos que no pueden subsistir a través del trabajo rural asalariado o migrar hacia los centros urbanos, donde el trabajo casual probablemente será su única opción, recurren a la estrategia de reclamar en la zona boscosa. La lucha por adquirir un trozo de terreno en las tierras altas y mantener un modo de existencia campesina de producción de pequeñas mercancías puede verse como una decisión para prevenir la semi o la completa proletarianización. Y el éxito de los ocupantes de tierras se debe a la incapacidad, y quizá también a la falta de voluntad, del Estado para prevenir la intrusión o el cercamiento completo de los bosques y las zonas altas. A pesar de la ausencia de un estimado de población de las tierras altas en las zonas boscosas dentro de Asia, lo que es evidente es que, a través de la migración espontánea y la ocupación de tierras estatales, innumerables grupos familiares han resistido la desagrarización.

La estrategia de desplazarse hacia el interior está muy lejos de ser novedosa. La retirada hacia un área interior remota, fuera del alcance del Estado, se produjo repetidamente durante el período colonial, aunque las razones previas podrían diferir de la coyuntura actual. Con todo, aquellos movimientos pueden tener líneas en común con los patrones contemporáneos. En ese entonces, la migración hacia las áreas interiores remotas, alejadas del alcance del Estado colonial, constituyó una estrategia para evitar la sumisión a éste tanto como al capital imperial extranjero (Aguilar, 1998; Peluso, 1992).

Desde el punto de vista del actor campesino, estas ocupaciones de tierras pueden representar lo que James Scott (1976) llama la economía moral del campesino, junto con el hecho de que los reclamos del Estado pueden percibirse como ilegítimos, o con el concepto nativo del derecho al usufructo de un espacio abierto que no pertenece sino a la naturaleza. Utilizar las

tierras del Estado puede concebirse como defendible debido al imperativo moral de la ética de subsistencia. Sin embargo, estos actos ocurren fuera de la estructura formal de la legalidad y pueden ser interpretados como una oposición al orden establecido por las clases hegemónicas. Desde 1980, no obstante, fuerzas populistas y conservacionistas –que se entrecruzan con movimientos internacionales de pueblos nativos– han impulsado cambios en las leyes de las zonas boscosas, lo cual ha generado el espacio para alguna forma de reconocimiento legal y oficial de los derechos de los demandantes de tierras altas. En las Filipinas están disponibles certificados de tenencia de tierra comunal para las comunidades nativas que sean capaces de formular un uso de la tierra y un plan de desarrollo de recursos naturales (que sugieren el rol crítico de las ONG en su asistencia a estas comunidades para embarcarse en un ejercicio de planeamiento formal). También han sido otorgados certificados de mayordomía a largo plazo a ocupantes individuales. De hecho, el Estado “ha sido reintegrado” en las tierras altas, donde previamente su rol no consistía más que en una ausencia pronunciada. Las nuevas políticas de las tierras altas hacen del Estado un árbitro final de la tenencia y posesión e introducen, inadvertidamente, las bases para el surgimiento de un mercado de terrenos en el lugar.

DISPUTAS POR LA TIERRA Y EL COLAPSO DE LA AGRICULTURA COLECTIVA

Las estrategias diarias empleadas por los campesinos en la adquisición de tierras mediante la colonización espontánea de zonas boscosas han sido evidentes en las discretas disputas por la tierra; como resultado, produjeron la culminación oficial de la agricultura colectiva en China y en Vietnam. Aunque el colapso de la colectivización no es usualmente enmarcado como una disputa sobre la tierra, y a pesar de las especificidades de los casos chino y vietnamita, los análisis históricos de eventos que llevan al fracaso de la agricultura socialista sugieren que el control sobre la tierra, el trabajo y la distribución del producto fue una preocupación central de los productores campesinos. Las disputas para adquirir terrenos y para cultivar parcelas privadas –con rendimientos que exceden aquellos de la agricultura colectiva– acontecen fuera del marco estatal y, aunque ampliamente descoordinadas, las acciones constituyen, efectivamente, un desafío a la hegemonía del Estado. En el caso de China, el desenredo de la agricultura colectiva coincidió con el período de crecimiento y la predisposición de la máxima dirigencia; en el caso de Vietnam, la situación viró hacia el escenario opuesto.

A mediados de la década del cincuenta, el programa de colectivización chino redujo la autonomía de los aldeanos y aumentó el control estatal sobre los mercados y la producción excedente, aunque en este período inicial los grupos familiares fueron habilitados para trabajar en

parcelas pequeñas de tierra que destacaron, claramente, el esfuerzo individual y sus contribuciones (Kung y Putterman, 1997). El programa de colectivización fue llevado al extremo en el Gran Paso Adelante entre 1958 y 1960, y su resultado fue una hambruna masiva (Kerkvliet y Selden, 1998: 41). A aquellos años desastrosos les siguieron campañas estatales exitosas de desarrollo de infraestructura rural y el lanzamiento de la revolución verde. Hacia fines de la década del setenta, la producción china de granos *per cápita* se había elevado a un nivel que les permitía a los campesinos asegurar su subsistencia e, incluso, el excedente extraído del campo abasteció el programa de industrialización chino. Pero debido a la gran pobreza, los ingresos estancados y el desempleo crónico: “Sin jactarse, a fines de los setenta, y a veces apoyados por funcionarios locales y regionales, los aldeanos presionaron para expandir el alcance de lo doméstico y el mercado” (Kerkvliet y Selden, 1998: 48). La discreta presión desde abajo coincidió con la nueva filosofía que emergió con el surgimiento de Deng Xiaoping luego de la muerte de Mao, en 1976. Durante los próximos cuatro años, entre 1978 y 1982, los derechos de cultivación de la tierra fueron devueltos a los grupos familiares campesinos.

La propiedad privada de la tierra, sin embargo, no ha sido restablecida oficialmente en China. La propiedad está establecida en las aldeas, cuyos funcionarios asignan derechos para el uso de la tierra a grupos familiares específicos por períodos extendidos. Éstos están sujetos a ajustes periódicos, a fin de dar cuenta de los cambios de tamaño en el grupo familiar (Kerkvliet y Selden, 1998: 50-51). A pesar de todo ello, a partir de los noventa el mercado de tierras de campesinos, especialmente en áreas costeras y suburbanas, ha comenzado a exhibir tendencias similares a las que pueden ser encontradas en otros trasfondos periféricos capitalistas. Los aldeanos con ingresos fuera de la granja, y especialmente aquellos con trabajos industriales lucrativos, se han convertido en una especie de clase terrateniente ausente. Subarriendan sus derechos sobre la tierra o contratan obreros, usualmente trabajadores golondrina, para los cultivos. En algunos casos, los cultivadores empleados son contratados para hacerlo en representación de todo el pueblo. Se dice que aproximadamente un cuarto de los equipos de producción anteriores retuvo o restableció las actividades de cultivo colectivas. En muchos otros casos, sin embargo, la tierra es labrada en forma privada (Kerkvliet y Selden, 1998: 52). Simultáneamente, el Estado chino continúa imponiendo cuotas para cultivos esenciales que son comprados por debajo de los precios de mercado y controla el suministro y el precio de los insumos agrícolas críticos. La gran variedad de arreglos para el uso de la tierra genera una situación extremadamente compleja en la cual el propietario y el obrero pueden relacionarse de varias formas, aun contradictorias; el propio Estado, incluso, actúa como explotador económico y como protector de la población campesina.

En Vietnam, la colectivización fue introducida en el norte durante los tardíos años cincuenta, pero la cauta estrategia estatal no difundió la colectivización sino hasta fines de la década del sesenta. Luego de la guerra, la colectivización se aceleró, pero la agricultura no obtuvo ninguna ganancia significativa. La tenencia colectiva de la tierra no condujo hacia el aumento de la productividad, situación que frustró los objetivos estatales. Los campesinos concentraron sus energías en el cultivo de sus parcelas privadas, lo que inicialmente comprendió el 5% de la tierra cultivable, y cuyo producto podía ser enteramente conservado por los campesinos. Las parcelas privadas produjeron arroz y otros frutos que fueron, al menos, el doble que los de las tierras colectivizadas. Los campesinos priorizaron el trabajo en sus diminutas parcelas privadas frente al estancamiento o deterioro de sus condiciones de vida, frente a la parte inequitativa recibida por funcionarios y cuadros no cultivadores del partido comunista, la gran burocracia que pretendía regular y regir sus vidas y granjas, y la impersonalidad de los grandes sistemas cooperativos (Kerkvliet, 1995: 402-404). Los campesinos mostraban poco entusiasmo por trabajar en tierras colectivizadas, y recurrieron al incumplimiento de metas y, en ocasiones, al abandono de la tierra.

Aunque oficialmente fuera de la ley, el cultivo familiar comenzó a surgir en el norte y el centro de Vietnam a mediados de los sesenta y hacia fines de los setenta, en la forma llamada “contratos furtivos”, y se ocupaba ineficazmente de arreglos de producción sin llamar la atención de la experimentación más bien dramática que se llevaba a cabo en algunas comunas (Kerkvliet, 1995: 406-407). En uno de los más grandes experimentos en Hai Phong, en un área de alrededor de 90 mil hectáreas, varias etapas de la producción de arroz fueron entregadas a familias individuales a las que se les permitió conservar el excedente que superara la cuota requerida. A pesar de que funcionarios de alto rango detuvieron experimentos análogos en otros lugares, el experimento de Hai Phong produjo resultados muy impresionantes, y en 1980 se convirtió en el modelo oficial para la región. Además, durante los setenta, el Estado vietnamita comenzó a relajar su control monopólico sobre el mercado, con cuotas que fueron discutidas, antes que impuestas, en las cooperativas.

En medio de la escasez urbana y de una economía que empeoraba, el reconocimiento de la producción doméstica individual empezó a comienzos de los ochenta. Las cooperativas fueron autorizadas a ingresar en “contratos familiares”, que asignaban parcelas de tierra directamente a grupos familiares de campesinos individuales, y ellos podían conservar o vender todo más allá de los montos establecidos por el contrato. Finalmente, el debate en torno a la noción de una economía centralmente planificada condujo a errores, y culminó en 1986 con la adopción de la política de *doi moi*, la construcción de una economía mixta. Como en China, la propie-

dad privada continúa siendo ilegal, pero los campesinos tienen ahora derecho a “usar derechos” por veinte años, y estos derechos son renovables, transferibles a sus herederos, y pueden ser vendidos e hipotecados. Estos cambios se efectivizaron mediante una ley aprobada por la Asamblea Nacional de Vietnam en 1993. Aunque no existe un límite máximo sobre la posesión de los derechos de uso de la tierra, la cantidad de tierra que un grupo familiar puede cultivar directamente es de tres hectáreas para cultivos anuales y de diez para cultivos perennes (Otsuka, 2002). Una nueva forma de lucha dentro del campesinado ha surgido así por los derechos de uso de tierras en el mercado. El Estado puede continuar influenciando este mercado debido a su poder para determinar la clasificación de áreas terrestres específicas (como agrícola, residencial rural, urbana, de uso especial, o tierra sin uso), lo cual pone un tope al precio de los derechos de uso de tierras. No obstante, está cobrando forma una clase de campesinos sin tierras, cuyas deudas causadas por los desastres naturales y los precios bajos de los productos agrícolas los han compelido a vender estos derechos. En la provincia de Can Tho, los sin tierra comprenden más de un 10% de los grupos familiares rurales (Otsuka, 2002: 126); la consecuencia es la proletarianización en un régimen oficialmente comunista.

El fin de la colectivización fue forjado, entre otros factores, por las estrategias familiares de resistencia diaria que, finalmente, transformaron la política estatal. El éxito de actos, aparentemente descoordinados, de grupos familiares y campesinos individuales, sugiere alguna forma de movimiento masivo, aunque no del tipo que involucra a emprendedores políticos claramente identificados. A partir de los actos fuera de los parámetros del Estado, las acciones campesinas han invadido el escenario central, y lograron el triunfo individual de la pequeña producción y la celebración oficial del cultivo familiar en pequeña escala. ¿Es ésta la venganza del campesino? Inevitablemente, los puntos de vista de Chayanovian sobre la economía campesina han sido reavivados por este resultado histórico. Con todo, como sugiere el estudio de Kitching (1998) sobre el fracaso de la colectivización en Rusia, la respuesta de Chayanovian pudo haber estado implicada en la insistencia de los campesinos para labrar sus propias parcelas privadas, pero este comportamiento debe ser comprendido dentro de un contexto más amplio. En el caso ruso, la generación que estimó la propiedad de tierra individual y la familia labrando la tierra como condición esencial para la identidad campesina había desaparecido, y fue la que podría haber exigido la venganza. Por el contrario, en la defunción de la agricultura socialista, las pequeñas granjas privadas y las grandes tierras colectivizadas operaban simbióticamente más que compitiendo, y los campesinos mismos parecían preferir convertirse en trabajadores industriales, si tan sólo el control estatal de la infraestructura económica les hubiera permitido cumplir ese deseo.

Los experimentos en China y, ciertamente en Vietnam, no compartieron un período históricamente largo como el de la agricultura socialista de Rusia. Pero los datos sugieren que la lucha por la tierra privada en Vietnam y China no quiso decir que los campesinos no se preocuparon por la distribución equitativa de la tierra: lo hicieron. De aquí que la “venganza” campesina en estos dos países no significó un deseo por regresar a las enormes disparidades de tierras del pasado. Más bien, sólo podría querer decir que las condiciones históricas específicas no dejaron que prosperara el sueño de la distribución equitativa de tierras. Los dictados de la pura supervivencia y una valoración racional más amplia del contexto con sus contradicciones, inequidades y sistemas alienantes (Popkin, 1979), los trajeron de regreso a las parcelas privadas. Ahora que efectivamente existe un mercado de tierras en estos países, las inequidades están volviendo y se está formando una clase de campesinos sin tierra o una clase de proletarios rurales. Las relaciones mercantiles han sido autorizadas en una zona relativamente libre en estas ex economías planificadas centralmente, y la simple reproducción de ganancias produce sus predecibles víctimas (Bernstein, 1981).

OCUPACIONES DE TIERRAS DENTRO DE PROGRAMAS DE REFORMA AGRARIA

Las instancias de ocupación de tierras demandadas dentro de los parámetros estatales también han logrado algún éxito. Las políticas estatales reformistas, no importa cuán defectuosas hayan sido, proveyeron el armazón legal para que estas ocupaciones se produjeran. Los estudios de casos de India (Pimple y Sethi, pág. 251 de este volumen), acontecidos en el transcurso del siglo XX, testifican la importancia de las políticas estatales mediante las que los grupos étnicos minoritarios han encontrado un camino para reclamar la posesión de tierra. Más allá de que el programa de tierra-para-el-agricultor haya sido un producto de la fase desarrollista o de las recientes modificaciones de fines de los ochenta, como en las Filipinas luego de Marcos (debido al clamor por el cambio en el contexto del ensanchamiento del espacio democrático), la legislación sobre la reforma agraria parece proveer una base para las ocupaciones. La acción directa sobre la tierra, como las experiencias filipinas que el siguiente debate ilustra, se ha producido cuando grupos de campesinos organizados sacaron provecho de grietas y obstrucciones en la implementación de la reforma agraria para reclamar la posesión que ellos creen les pertenece legítimamente. Mientras el objetivo es claramente el control de la tierra, los grupos campesinos han tenido que batirse con un amplio rango de fuerzas contrarias, de intereses corporativos y terratenientes recalcitrantes, irreconciliables con las demandas de los pobres rurales. En cualquier caso, la intervención de actores estatales favorablemente dispuestos y de ONG ha

sido crucial en la organización de beneficiarios de la reforma agraria y su toma de la tierra. Sin embargo, a pesar de los puntos de intersección con el movimiento revolucionario del Partido Comunista de las Filipinas (CPP, por su sigla en inglés) y de la coordinación a escala nacional de las luchas por la tierra (discutido por Feranil, en la pág. 273 de este volumen), estas ocupaciones permanecen, esencialmente, localizadas y desarticuladas de las luchas por la tierra en general. De todas formas, poseen el potencial para ser parte de un movimiento social de gran escala.

Un intento exitoso de ocupación de tierras realizado dentro del marco de la reforma agraria de las Filipinas incluye a la Hacienda Pecuaría, de ochocientas diecisiete hectáreas, en Bula, provincia de Camarines Sur, en la isla principal de Luzon (Abelardo, 1997). En un principio, el dueño era un griego; después de la Segunda Guerra Mundial, la hacienda pasó a manos de dos terratenientes filipinos. Para 1972, funcionaba como una granja corporativa, con más de setenta empleados criando cerdos y ganado y plantando arroz, maíz y caña de azúcar. Su fuerza laboral, eventualmente, se expandió para incluir unos quinientos obreros rurales. En 1985, la compañía se declaró insolvente, y un año más tarde, los trabajadores de la hacienda fueron despedidos. Amenazados por el Nuevo Ejército Popular del CPP, que operó en el área, en 1988 los dueños decidieron poner la propiedad a disposición del programa de reforma agraria del gobierno, bajo el esquema “Oferta Voluntaria para Vender” (VOS, por su sigla en inglés). Con la amenaza de la fuerza como telón de fondo, la reforma agraria en esta hacienda no fue llevada a cabo ni por el mercado ni por el altruismo. El caos surgió, más bien, porque la oportunidad de adquirir un trozo de la gran hacienda generó competencias entre los varios grupos interesados y precipitó una lucha abierta e, incluso, violenta.

Un total de mil individuos solicitó tierras en la Hacienda Pecuaría, pero el filtrado inicial realizado por el Departamento de la Reforma Agraria (DAR) recortó a seiscientos veinte a los beneficiarios potenciales. Los anteriores trabajadores de la hacienda fortalecieron su grupo e hicieron una potente oferta con el apoyo de los dueños, cuyo rol se había modificado de empleadores a patrocinadores. Confiados en que les serían adjudicadas, cien de los anteriores trabajadores de la hacienda y ciento treinta y seis residentes de un pueblo cercano entraron en la propiedad y ocuparon las mejores porciones de la tierra en 1988. Pero los oficiales de la DAR les advirtieron que podían ser descalificados por no seguir los procedimientos correctos; los ocupantes se retiraron. Después de un gran tifón en 1989, treinta y seis individuos entraron en una hacienda aparentemente abandonada, pero ellos no eran ni anteriores trabajadores de la hacienda ni residentes de pueblos cercanos. Más ocupantes ilegales entraron en la hacienda; su número superó los doscientos. Hacia 1990, la situación estaba fuera de control. Una cierta cantidad de los solicitantes originales

comenzó a acordonar el área para disuadir a los nuevos candidatos, pero algunos maleantes que se encontraban en el último grupo continuaron con las incursiones. Con el objetivo de evitar el incremento de la violencia, una organización no gubernamental unió sus fuerzas con el DAR para iniciar un proceso de consulta a diversos partidos y ayudar a decidir en las conflictivas demandas. Los beneficiarios “legítimos” tuvieron que ser identificados mediante criterios del gobierno y procedimientos de filtraje. De los seiscientos veinte solicitantes originales, sólo cuatrocientos ochenta fueron estimados como calificados. Los ocupantes ilegales fueron ubicados en la prioridad más baja, lo que agravó la tensión entre los demandantes. En 1992, ambas partes comenzaron a organizar manifestaciones públicas para airear sus demandas. Más tarde ese año, el DAR se decidió a adjudicar una porción de cien hectáreas contiguas dentro de la hacienda a favor de los que fueron conocidos como los “participantes ilegales”.

Mientras tanto, hacia el año 1991, los irreconciliables grupos originales –aquella oposición entre anteriores trabajadores de la hacienda y demandantes “sin tierras” de tres pueblos cercanos– decidieron constituirse en una importante alianza en contra de los ocupantes “ilegales” que habían venido de otros sitios. En 1992, este grupo estaba registrado como la Cooperativa de Desarrollo Pecuaría SA (PDCI, Inc.). Debido a que una porción de la hacienda había sido asignada a los “ilegales”, los funcionarios del gobierno decidieron reacomodarlos y proveer áreas que pudieran ser usadas por miembros del PDCI. La reubicación, realizada en mayo de 1993, originó acaloradas discusiones y algunos ilegales se rehusaron a cooperar. A fines de ese año, sin embargo, doscientos dos miembros de PDCI poseían el 47% de la hacienda. Las tensiones no aflojaron. En abril de 1994, Pablito Dante, líder del PDCI, murió apuñalado en el transcurso de una discusión. Al hecho le siguió una concertada intervención de una ONG y se planificó una reubicación “festiva”, de precisión militar. No obstante, cincuenta de ciento catorce ocupantes ilegales rechazaron la asistencia monetaria y la reubicación en un sitio designado. Luego de otros diálogos, algunos ocupantes ilegales acordaron trasladarse, pero un considerable número se mostró reacio. Los datos disponibles a principios de 1996 indicaban, sin embargo, que cuatrocientos veintiséis miembros del PDCI habían sido capaces de reclamar parcelas de tierras que promediaban las dos hectáreas en cada caso, además de un lote residencial de 600 metros cuadrados.

El caso de la Hacienda Pecuaría demuestra una toma de posesión de tierras sancionada por el Estado que tuvo que enfrentar, no clases hegemónicas, pero sí luchas “internas” dentro del campesinado. La fuerza laboral –un proletariado agrario– de la hacienda trató de convertirse en un campesinado propietario; pero cuando se volvió evidente que su interés grupal no prevalecería ingresaron, como campesinos en espera, en una

alianza con otros campesinos que deseaban adquirir tierras. Dada la gran necesidad por la tierra, la competencia fue casi inevitable, especialmente porque la información respecto de la “disponibilidad” de la Hacienda Pecuaria no había sido ocultada a los medios de comunicación. La competencia por la tierra cobró forma bajo el lema de “el primero que coloca el poste”. Los campesinos que habían venido de otros lugares trataron atrevidamente de ocupar tierras, y representaron una amenaza para el campesinado local que parecía tener un “derecho diferencial” sobre la tierra. La intervención aparentemente conciliatoria de los funcionarios de la reforma agraria para asignar tierra a “los ocupantes ilegales” no fue capaz de resolver una situación altamente conflictiva. Las regulaciones estatales prevalecieron decisivamente en favor de los “legítimos” beneficiarios. Sin embargo, allí permanece el desafío planteado por el 20% de los asociados al PDCI, a quienes les habían concedido tierras pero no las habían ocupado. Durante la larga lucha, muchos de ellos se mudaron o emigraron hacia centros urbanos. La “ocupación ilegal” podría aumentar y nuevos conflictos similares podrían resurgir. Las luchas por la tierra de esta hacienda están lejos de haber terminado.

Otra instancia de ocupación de tierras dentro del marco de la reforma agraria del Estado es ilustrada por el caso de la Corporación Agro-Industrial Filipina PAICOR, hacienda en la provincia Baungon, Bukidnon, en la isla de Mindanao (Cabanes, 1997). Con sus cuatrocientas sesenta y cuatro hectáreas y media, la hacienda PAICOR había sido parte, en un principio, del dominio público que los campesinos reclamaron y cultivaron en forma individual para su usufructo, en un proceso no tan diferente respecto del descrito en la primera sección de este trabajo. Un comerciante local emprendedor comenzó a comprar la tierra cultivada, hasta que él y su familia acumularon una propiedad enorme. El PAICOR adquirió la propiedad y el almidón de yuca comenzó a procesarse en 1978. Pero el monocultivo de la yuca agotó los nutrientes del terreno, y en unos pocos años la compañía enfrentó pérdidas financieras enormes. En 1987, resolvió rotar la producción hacia el maíz y, al año siguiente, después de declararse en bancarrota, despidieron a todos, excepto a sesenta de sus obreros rurales. Como área que cultiva maíz, la hacienda quedó bajo el alcance del Programa de Reforma Agraria Comprehensiva, pero la corporación no quería vender la tierra voluntariamente. En abril de 1989, el DAR procedió a expropiarla y, forzosamente, a transformar la hacienda en un área de reforma agraria; los dueños corporativos presentaron una petición para retrasar la reforma por diez años, argumentando que el cambio de cultivo había sido una medida temporal. La petición fue denegada, pero la compañía hizo varias apelaciones.

A pesar de la apelación, el DAR reunió cerca de quientos nombres de potenciales beneficiarios y llevó adelante el proceso de selección con

representantes del gobierno y de las ONG. La lista fue rebajada a aproximadamente trescientos nombres, cuya mayoría eran empleados de la compañía que habían sido despedidos. Después de más de una audiencia pública, los inminentes beneficiarios comenzaron organizarse y a movilizarse con ayuda de las ONG. En septiembre de 1992, trece certificados de tierras que abarcaban 143 hectáreas –el 47% del área de reforma agraria dentro de la hacienda– estaban dispuestos para ser entregados a los beneficiarios organizados. El PAICOR protestó, y una orden legal fue expedida para suspender el proceso de reforma. El caso permanece pendiente.

Debido a que la transferencia de tierras estaba paralizada por el caso en tribunales, los beneficiarios decidieron que no podrían esperar los años que el sistema judicial demorara en resolver el asunto. Además, la eventual decisión podría no ser tomada en su favor. Con la asistencia de las ONG como socias, los beneficiarios de la reforma agraria concibieron un sistemático plan de invasión terrestre de tres días, lo cual llevó a cercar el área e, inmediatamente, a iniciar el trabajo de campo. La invasión estaba pensada para coincidir con un congreso campesino que iba a realizarse en un lugar adyacente al sitio en disputa. La ocupación fue programada para el 14 de marzo de 1994. Sin embargo, la compañía se enteró del plan y envió a sus guardias de seguridad a patrullar el área. La ocupación se pospuso un par de días. En presencia de algunas ONG, periodistas y oficiales de policía locales, la invasión tuvo lugar, y a pesar de algunas escaramuzas con guardias de la compañía se procedió, en líneas generales, de forma pacífica. Como era de esperar, la compañía objetó, pero los beneficiarios de la reforma agraria estaban acompañados por su propio asesor legal, por lo que no podían ser movidos del terreno. El caso fue llevado a la corte bajo la carátula de “ingreso por la fuerza”.

Resulta interesante destacar que los ocupantes de tierras, en su mayoría trabajadores despedidos de la compañía, tuvieron que ponerse en guardia para pelear con los trabajadores de la compañía, cuyo sindicato estaba afiliado a la Asociación, a nivel nacional, del Sindicato de Trabajadores-Congreso de Sindicatos de las Filipinas (ALU-TUCP). El sindicato de trabajadores insistió en que era el legítimo beneficiario de toda la hacienda. Después de un largo diálogo, el sindicato de trabajadores se conformó con ciento trece de las ciento cincuenta y nueve hectáreas restantes que no habían sido asignadas a los destinatarios individuales.

Mientras la resistencia del capital corporativo a la reforma agraria es comprensible, el caso de la hacienda PAICOR es instructivo acerca del conflicto entre diversos interesados que ocupan diferentes posiciones de clase ante la ocupación de tierras. En este caso, una fuerza laboral de la plantación, respaldada por una gran organización de la clase trabajadora industrial, fue puesta en contra de trabajadores recampeonizados despedidos y de otros campesinos demandantes de tierras.

El sindicato empresarial fue visto como el obstáculo principal para la ocupación, porque quiso aprovecharse de ambos: de la compañía como su proveedora de trabajo y de la ley de reforma agraria, si eventualmente se convirtiese en ley. En este caso, un proletariado de la plantación fue puesto en contra de un campesinado compuesto, principalmente, de productores de mercancías básicas. En contraste con la Hacienda Pecuaria, donde segmentos del campesinado, literalmente, batallaron por la limitada tierra disponible, en la hacienda PAICOR dos clases agrarias estaban en competencia. Estos conflictos entre las clases no hegemónicas personifican la fragmentación de la clase social en las zonas rurales como diversos grupos y clases que buscan asegurar una base material para la pequeña producción de bienes. Aunque diversas formas de compromiso han sido alcanzadas, éstas necesariamente excluyeron a otros campesinos que también necesitaban tierras.

Debe resaltarse que las ocupaciones y las respuestas ocurren todas dentro del marco del Estado, en primer lugar dentro de la legislación de la reforma agraria y su burocracia y, luego, dentro del complejo y más amplio aparato estatal, legal y judicial. Trabajar dentro de parámetros estatales puede ser un movimiento táctico o estratégico. No obstante, las ocupaciones de tierras dentro del espacio reformista del estado dependen, finalmente, del Estado y de las instituciones estatales para decidir asuntos y demandas de legalidad irreconciliables. Ciertamente, hay matices en las batallas, estrategias y resultados, pero el Estado se convierte en la institución crucial.

En Sumilao, también en la isla de Mindanao, los campesinos enfrentaron al gran capital corporativo cuando el arrendamiento de diez años de Del Monte Filipinas sobre 144 hectáreas de tierra agrícola de primera caducó en 1993. Los ciento treinta y siete miembros campesinos de la Cooperativa Mapalad compitieron con la Norberto Quisumbing, Corporación de Desarrollo y Dirección, que buscaba convertir el área en un sitio agro-industrial. Insistiendo en que el área había estado por mucho tiempo al amparo de un aviso de adquisición compulsiva, el DAR se puso del lado de los campesinos, y el certificado de propiedad de la tierra fue expedido para los campesinos de Mapalad, en septiembre de 1995. Pero la compañía Quisumbing había apelado la decisión de la DAR a la Oficina del presidente, cuyo secretario ejecutivo revocó la decisión de DAR y aprobó el plan de conversión de la compañía en marzo de 1996. A pesar de solicitar varias mociones para la reconsideración, en julio de 1997 setenta y ocho campesinos de Mapalad entraron en la propiedad y empezaron cultivarla. Sin embargo, enfrentados al hostigamiento sistemático y a la violencia, los campesinos se vieron forzados a dejar las tierras ocupadas. Con el apoyo de ONG y de la Iglesia Católica, doce campesinos de Mapalad, tres de los cuales eran mujeres, peregrinaron hacia la capital nacional en

octubre de ese año para escenificar una huelga de hambre delante de la oficina principal de la DAR. La huelga, que duró veintiocho días, atrajo la atención considerable de los medios masivos de comunicación. La intensa publicidad obligó luego al presidente Fidel Ramos a forjar a una comisión independiente y, eventualmente, a conceder cien hectáreas para la Cooperativa Mapalad (Mapalad Agrarian Reform Monitor, 1998).

Los primeros dos casos de reforma-con-ocupación de tierras mencionados en este trabajo ilustran la situación de campesinos que trataron con el capital corporativo agrario debilitado por las bancarrotas. En ese contexto, los diversos fragmentos de clases no hegemónicas lucharon entre ellas por una porción de la tierra. En el tercer caso, los campesinos enfrentaron un interés capitalista corporativo más poderoso y con muy buenas relaciones. Como podemos ver en el relato de Feranil (en la pág. 273 de este volumen), en las luchas contra las clases hegemónicas se arriesgan al hostigamiento, a represalias y a contrarreformas. En el último caso presentado aquí, pero también dentro de los dos anteriores, la causa campesina se benefició de la intervención en su favor de actores dentro de la burocracia de la reforma agraria, que brindaron tácita aprobación y legitimidad a las planeadas ocupaciones de tierras. El predominante espacio democrático, la determinación campesina y la intensa atención pública de los medios masivos de comunicación obligaron al Estado a ceder, eventualmente, a su brazo reformista. Debido al contencioso contexto legal y al deseo de los campesinos de concretar su demanda de tierras dentro de la ley, se orquestaron y planearon acciones campesinas masivas con la ayuda de ONG, profesionales legales y defensores de la reforma agraria estratégicamente ubicados dentro de la burocracia. Lejos de lo espontáneo, estas ocupaciones de tierras se beneficiaron del hecho de que el Estado no sea monolítico.

LA TORPE COMPULSIÓN DEL MERCADO

Cualquier debate sobre luchas de la propiedad agraria, su posesión y control, debe tener en cuenta el rango de las transacciones de tierras basadas en el mercado que realmente ocurren en las zonas rurales. El mercado raramente es visto como oferente de la posibilidad de proveer tierras para los desposeídos y capaz de lograr una redistribución justa y activos agrícolas. La prueba elocuente es la operación del mercado en los contextos agrícolas postsocialistas de China y Vietnam, mediante la que un sutil forcejeo por la tierra deja a unos sin tierra, mientras otros adquieren más de la que pueden cultivar personalmente. En otros contextos asiáticos, la legislación de la reforma agraria no ha detenido los mecanismos de mercado que permiten concentrar tierra en manos de los relativamente ricos. Este grupo incluye a los campesinos ricos que pueden aumentar sus tenencias debido a la pequeña acumulación capitalista dentro de la agricultura o

con la asistencia de fuentes externas, como los envíos de dinero de parientes involucrados en la migración laboral internacional; también incluye a los segmentos de la pequeña burguesía rural, como comerciantes y profesionales de bajo nivel, que deciden invertir sus ganancias y sus ahorros en tierras que probablemente luego subarrenden. La tierra, generalmente, es adquirida a campesinos del minifundio que disponen de lotes precarios, inducidos por deudas que son el producto de relaciones mercantiles que extienden y profundizan la explotación. Otros venden sus tierras antes de migrar hacia la ciudad. La torpe compulsión de las fuerzas económicas amplía la asimétrica distribución ya desigual de la tierra.

Así, los resultados de un estudio en West Bengal constituyen una sorpresa. Vikas Rawal (2001) examinó ventas de tierras en dos pueblos, desde 1977 hasta 1995, y se encontró con que los mercados de tierras contribuyeron a redistribuir pequeñas parcelas para los pobres campesinos que, de otra manera, no las habrían podido obtener. West Bengal y Kerala son excepcionales en India por la forma en que implementaron y dieron cuerpo a la reforma agraria. Después de las luchas políticas de los años sesenta y setenta, una coalición de partidos de izquierda, dominada por el Partido Comunista de India, subió al poder en 1977. El programa de reforma agraria que se implementó después de 1977 dio derechos permanentes de cultivo a aproximadamente 1,4 millones de aparceros; expropió 1,26 millones de acres de tierra, cuya mayor parte fue distribuida entre unos 2,5 millones de grupos familiares; impuso un tope a las propiedades y distribuyó la tierra estatal para los sin tierras. Las unidades locales de gobierno –los Panchayats– y masivas organizaciones rurales se convirtieron en participantes activos del proceso de reforma agraria. Estas reformas fomentaron la producción agrícola y las tasas de productividad de West Bengal; por ello, ganaron la reputación de una “historia de éxitos”. Este contexto es importante para entender la dinámica del mercado de tierras en los dos pueblos del distrito Bankura estudiados por Rawal, donde la intensidad del cultivo y el crecimiento de las tasas de producción fue aun superior al promedio estatal. En ellos, el volumen de ventas de tierras fue también notablemente más alto que en otras partes de la India. Pero más notorio fue el hecho de que la reforma agraria y el cambio agrario serios influenciaron el comportamiento de los mercados de tierras.

En los dos pueblos estudiados, el 40% de los grupos familiares compró tierras cultivables entre 1977 y 1995, mientras que el 24% permaneció sin tierras. Durante este período, el programa de reforma agraria proveyó tierras para el 15,3% de los grupos familiares, actualmente terratenientes, que estaban sin tierras en 1977. Las transacciones se convirtieron en la manera de adquirir tierras por parte del 17,2% de los grupos familiares, actualmente terratenientes, que estaban sin tierras en 1977. En total, el

32,5% de los grupos familiares terratenientes en 1995 había formado parte de la categoría de los sin tierra en 1977. Muchos de aquellos que habían comprado pequeñas parcelas a través de transacciones en efectivo formaban parte de una casta inventariada y de una comunidad tribal inventariada. Los vendedores de tierras fueron principalmente terratenientes no residentes y un gran terrateniente residente. De los sesenta y ocho grupos familiares que estaban sin tierras en 1995, sólo dos poseyeron tierra en 1997 y se vieron forzados a venderla en el ínterin. Rawal (2001) atribuye estos inesperados resultados a la mejora, si bien pequeña, en el poder adquisitivo de campesinos pobres y sin tierras, a causa de salarios reales superiores y del aumento de los días de trabajo, que fueron posibles debido a la mejora de la productividad agrícola después de la reforma agraria. El mismo proceso de implementación de la reforma agraria también convenció a los terratenientes con tierras en exceso de que sería más ventajoso venderlas antes que mantenerlas. La ley de la reforma agraria también tomó una posición fuerte contra el ausentismo. En este trasfondo, el dos veces marginado proletariado agrícola (dos veces, a causa de proscripciones culturales y de la estructura económica) utilizó sus pequeños ahorros para comprar diminutas parcelas sobre las que los dueños, básicamente, habían perdido el interés. El mercado estaba lejos de efectuar una redistribución radical de la tierra, pero el contexto histórico produjo, al menos en este lugar de la India, un resultado muy inesperado. La acción campesina de comprar pequeñas parcelas pudo haber sido espontánea –pues no puede clasificarse como un movimiento organizado– pero no pudo haber ocurrido sin el marco estatal apropiado y el papel solidario de masivas organizaciones rurales.

Los campesinos también están adquiriendo y perdiendo terrenos cultivables a través de transacciones informales de mercado, que toman la forma de contratos de tierra empeñada. El prestatario pierde la tierra cuando la deuda no es pagada dentro de un período planeado de antemano. Estos arreglos han sido reportados en varios países asiáticos, particularmente en Bangladesh, India, Indonesia, Tailandia y las Filipinas. Donde los valores de las tierras son bajos y el mercado de tierras, así como también el mercado financiero, está plagado de imperfecciones, los terrenos empeñados prevalecen. En países musulmanes, el empeño de los terrenos es una forma de evadir la prohibición del cobro de tasas de interés explícitas (Ghate, 1988). En cualquier caso, el arreglo es un mecanismo socialmente aceptado para proveer y asegurar préstamos. En las Filipinas, a pesar de la previsión de la ley de reforma agraria contra la venta o el empeño de tierras reformadas dentro de los primeros diez años de su adquisición, tales transacciones se han extendido en algunas áreas. Aun en períodos anteriores, cuando la tenencia compartida fue la norma aceptada, los campesinos compraron y vendieron derechos de tenencia.

Estos arreglos informales bien pueden conducir a una concentración de la tierra en manos de campesinos más ricos, de la misma manera que una deuda puede causar a los campesinos pobres la pérdida de la tierra usada como garantía colateral. El estudio de Fukui (1995) sugiere, sin embargo, que un agravamiento de la necesidad de distribución de la tierra no debe ser el resultado necesario. En un pueblo en la provincia de Nueva Ecija, en las Filipinas, donde una cuarta parte de los grupos familiares estaba comprometida con contratos de empeño, Fukui encontró que el tamaño de campo promedio del deudor prendario (2,53 hectáreas) era mayor que el tamaño de campo promedio del acreedor prendario (0,89 la hectárea). Además, los activos promedio del acreedor prendario eran cerca de seis veces los del deudor prendario. La mayor parte de estas transacciones fueron buenas a lo largo de un año y medio a tres años. Así, Fukui interpreta la situación en este pueblo como uno en el cual un grupo familiar campesino con un área chica de tierra para cultivar pero con recursos sobrantes (obtenidos por un sistema eficiente de producción o por ingresos de afuera del campo) entra en un contrato de tierra empeñada como una forma de adquirir derechos de cultivo sobre un área ampliada. Adquieren la tierra empeñada de campesinos con tenencias de tierras relativamente grandes pero de recursos inferiores, mientras éstos dejan una porción de su tierra para adquirir fondos para invertir. Ello parece ser un negocio comercial desvinculado de la agricultura, que produce una ganancia más alta que la labranza de la tierra. El empeñar así parece un arreglo mutuamente beneficioso. Es incierta la medida en la cual se pueda generalizar la investigación de Fukui. De todas maneras, en este caso al menos, un mercado defectuoso facultó a los campesinos para realizar acciones directas sobre la tierra, y el resultado es una reubicación temporal de este medio básico de producción, en contra de los dictámenes del Estado pero de acuerdo con los requisitos del pequeño capital agrario.

Los que apoyan el discurso neoliberal de desarrollo de mercados formales de tierras rurales (a través de instituciones financieras y de actividades derivadas como el titulado de tierras y la administración de registros de tierras racionalizadas) y aquellos que sostienen el uso de la reforma agraria para las transacciones formales de la tierra no pueden usar los casos esbozados aquí para respaldar su posición. Desde Nueva Ecija a West Bengal, los resultados son altamente contingentes y dependientes de factores históricamente específicos. Un mercado de tierras incontenible hará estragos en campesinos pobres, que tienen poca probabilidad de emerger triunfantes en esta lucha: carencia de tierras y proletarianización son el destino que más probablemente los espera. Por otra parte, no puede negarse que la mercantilización de la tierra campesina avanza rápidamente, tanto en su versión poscolectivizada como

nunca colectivizada. Existe una cierta irrevocabilidad en la mercantilización de la tierra, aun en casos iniciados con ocupaciones directas.

Al mismo tiempo, donde se encuentran ingresos lucrativos fuera de las granjas, como en las industrias rurales, los grupos familiares campesinos parecen haber mejorado su estado socio-económico, incluso sin cambios en la distribución de tierras agrícolas. Esta tendencia parece ocurrir en algunas partes del sudeste de Asia, aunque la tendencia global permanece poco clara debido a las condiciones sumamente dispares. En tales instancias, Rigg (2002) observa que la tierra “ya no es el recurso estratégico” que una vez fue. En localidades en las que los campesinos pueden obtener ingresos comparativamente altos de una combinación de fuentes de la granja y de afuera de ella, si esta última constituye la fuente más significativa de ingresos, la pobreza, sostiene Rigg, puede ser desvinculada de la distribución inequitativa de la tierra. Como el estudio de Fukui sugiere, los campesinos del minifundio pueden tener más ingresos disponibles que aquellos con mayores tenencias de tierras. Este patrón ha sido actualizado en algunas partes de la periferia capitalista en Asia, no sólo por una industrialización emergente sino también debido al fenómeno de migración laboral de ultramar y al empleo, lo cual se discute en la siguiente sección. Lo que es aparente es que las luchas por las tierras asumen una diversidad de formas (incluyendo la confianza en actividades no agrarias y, para otros, la eventual migración). Dadas sus condiciones históricas específicas, los campesinos adoptan un rango de estrategias para ganar seguridad y mejorar sus condiciones económicas, estrategias que, finalmente, los localizan, en simultáneo, dentro de relaciones y posiciones de clase contradictorias y progresivamente desbordadas.

LA MIGRACIÓN GLOBAL Y LA PROPIEDAD DE TIERRA RURAL

En otro estudio de tierras empeñadas en las Filipinas, Nagarajan et al. (1992) encontraron que los campesinos recurrieron a contratos de empeño como un instrumento de crédito informal. Los campesinos pobres tienden a empeñar sus tierras como recurso para financiar emergencias médicas y necesidades vitales de consumo. Pero el patrón predominante en el estudio de estos autores fue el uso de contratos de empeño como forma de aumentar el capital para invertir en actividades fuera del campo, de las que se esperaba que produjeran mayores ingresos que la agricultura. Estos campesinos eligieron invertir dinero en capital humano—mediante la educación de niños— y obtener empleos en ultramar.

La migración laboral, que en el sudeste y en el sur de Asia ha experimentado, durante estos últimos años, una tendencia hacia la feminización, con más mujeres migrantes que encuentran trabajo doméstico pago en ultramar (Aguilar, 2002; Battistella y Paganoni, 1996; Chin, 1998; Constable, 1997), ha inyectado una fuerza completamente nueva en las zonas rurales.

Los estudios de aldeas y pueblos han demostrado que los envíos de dinero de emigrantes laborales en ultramar empeoran la estratificación del ingreso, pero permiten a los grupos familiares campesinos que poseen recursos y activos insignificantes ser catapultados hasta alcanzar escalones superiores en la estructura social de sus aldeas y pueblos. De hecho, el grupo familiar puede adoptar la estrategia de deshacerse de una cierta cantidad o de todos sus activos de tierras precisamente para invertir dinero en empleos de ultramar –para los hombres, en su mayor parte como marineros y en la construcción– que usualmente, pero no siempre, producen ingresos significativamente superiores (Bautista, 1989). Otros pudieron haber generado los medios para obtener contratos de ultramar a través de la pequeña acumulación capitalista, posibilitada por el cambio agrario general (como las ganancias de la revolución verde) e ingresos de actividades económicas no agrarias. En esta situación, observamos el otro extremo del espectro de las luchas por la tierra, caracterizado por la fuga de la tierra, a medida que los campesinos deciden dejar atrás la agricultura para convertirse en proletarios en otro Estado nacional. Así, existen huecos considerables en las zonas rurales, donde la lucha no está orientada a adquirir y poseer tierras sino a salir definitivamente del campo agrario. En estas instancias, la propiedad de tierras ya no es la meta deseada. La falta de una ligazón emocional hacia la tierra puede ser una sorprendente observación cuando los campesinos parecen listos para explorar opciones fuera de la agricultura. Pero en el sudeste de Asia, al menos, los campesinos no poseían históricamente la “inclinación natural” hacia la tierra que las autoridades coloniales europeas esperaban que exhibieran. En la península malaya, por ejemplo, la legislación colonial a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX fue un registro de difíciles esfuerzos e intentos fallidos por generar la existencia de una clase de campesinos cultivadores terratenientes que permanecieran asentados más o menos permanentemente en un lugar atendiendo una parcela fija de tierra (Kratoska, 1985). Que los campesinos no estén por naturaleza apegados a ella –muchos la ven en términos instrumentales, en contraste con algunos defensores de la reforma agraria, que ven la tierra con una reverencia casi sagrada (Aguilar, 1992)– iluminará las estrategias adoptadas por los campesinos contemporáneos en su búsqueda de un avance económico más allá del campo agrario.

Los campesinos que comienzan con muy pocos recursos pero logran enviar un niño a ultramar han experimentado saltos importantes en las oportunidades de vida de los miembros de la familia. Fuwa (1996) describe el caso de una familia, cuyo jefe había heredado media hectárea de tierra que luego perdió en su totalidad probablemente para financiar necesidades de subsistencia. Sus ingresos provenían del “sector informal”, hasta que obtuvo derechos de cultivo como arrendatario parcial a principios de la década del ochenta. En 1986, una hija educada en la escuela secundaria

solicitó y obtuvo un empleo como “anfitriona” en Japón, con un salario básico de US\$350 por mes, que gradualmente se elevó hasta US\$1.050 en 1993. Sus envíos de dinero han contribuido desde entonces a la masa del ingreso de su grupo familiar en las Filipinas. El padre continúa siendo un arrendatario parcial, pero ha invertido en una bomba de irrigación y en un tractor, además de mejorar el lugar físico de residencia del grupo familiar. Subsiguientemente, con el dinero en efectivo disponible, un hijo pudo encontrar empleo como obrero industrial en Arabia Saudita y aumentar los envíos de dinero al grupo familiar en las Filipinas. Aunque los beneficios de las migraciones globales no son enteramente claros, el caso descrito aquí no es inusual. Ingresos provenientes de ultramar han permitido a grupos familiares campesinos adquirir tierras, algunas veces más de las que pueden cultivar; sin embargo, estas parcelas son luego subarrendadas en una base de aparcería a campesinos más pobres.

En el Egipto rural, Weyland (1993) ha encontrado que la migración laboral internacional es utilizada como una estrategia para la reproducción social en el sentido literal, por la que sin las ganancias provenientes de un empleo contratado en otro estado, al varón le sería difícil juntar el dinero que se necesita para pagar la dote, el matrimonio y el establecimiento de una familia. Las esposas también pueden impulsar a los maridos a convertirse en trabajadores migratorios para obtener recursos, establecer un grupo familiar autónomo y evitar las fricciones que usualmente se generan cuando se vive con los parientes políticos. La migración como estrategia no debería, por consiguiente, insinuar una homogeneidad de metas e intereses dentro de la unidad doméstica. Weyland (1993) señala, incluso, que la migración laboral internacional no conduce a la desintegración del grupo familiar campesino y del sistema de producción. Los mayores ingresos se usan para comprar tierras y animales que perpetúan el modo de vida campesino, aunque ahora inseparable de una cultura modernizante. Ciertamente, los trabajadores asalariados sin tierra se han convertido en terratenientes. Por sobre todo, entonces, las migraciones globales aumentan la pequeña producción campesina y contribuyen a elevar la posición social y de clase del grupo familiar en la localidad.

Mientras algunos campesinos quieren dejar la agricultura trabajando en ultramar, otros generan capital desde esos empleos para persistir en la agricultura e, incluso, invertir en ella. Así, los envíos de dinero de ultramar complican significativamente las formas híbridas de relaciones de clase y los imbricados circuitos de explotación que definen y hacen a las estructuras rurales de clase en el sudeste asiático (Aguilar, 1989; Turton, 1989). Estos envíos pueden transformar la subsistencia del grupo familiar campesino en una unidad agrícola familiar capitalizada. El campesino puede apoyarse primordial o completamente en brazos contratados para cultivar la tierra, adquiriendo la posición de clase de

un empleador pequeño capitalista en un proletariado rural. El dueño capitalizado de la granja puede luego decidirse a trabajar fuera de ella y obtener ingresos en efectivo de trabajos pagos emprendidos en otros sitios (una posición proletaria), o involucrarse en una pequeña empresa (una posición autónoma o pequeño-burguesa). Mediante inyecciones monetarias directas, los migrantes campesinos como miembros del proletariado global, o de la clase marginada, estimulan directamente el capitalismo campesino y la industria microcapitalista rural. La economía rural, durante el proceso, se enlaza directamente con las contradicciones de la acumulación de capital global (Aguilar, 2003). Las resultantes posiciones y relaciones de clase, múltiples y contradictorias, inevitablemente complican el campo político y afectan sutilmente las luchas por las tierras en las zonas rurales. Aunque el deseo de muchos sea poseer un trozo de terreno, ser arrancados a la fuerza por grandes terratenientes, el capital corporativo o el Estado hace que cada vez más personas busquen una escapatoria literal a través de la migración global. Los campos de fuerza de la globalización afectan así las luchas locales por la tierra y transversalizan las contradicciones entre los Estados nacionales.

CONCLUSIÓN

Las luchas por la tierra en Asia son tan diversas como su paisaje político, económico y cultural. Éstas toman variadas formas: la acción individual o en grupo; el uso de mecanismos estatales o de los mercados de tierras formales o informales; y en contra del Estado o de las clases hegemónicas, o en competencia con otros campesinos y otros miembros del proletariado rural. Las luchas por las tierras van desde ocupaciones de tierras individuales en áreas de tierras altas y maniobras individuales dentro y alrededor de la agricultura colectiva para priorizar las parcelas privadas, hasta ocupaciones de tierras bien organizadas que se aprovechan de las fisuras en la implementación de las reformas agrarias estatales. Un movimiento de gran escala como las fuerzas comunistas revolucionarias en las Filipinas también se ha involucrado en ocupaciones de tierras. Pero, evidentemente, predominan las formas cotidianas de resistencia.

Más allá del tipo de lucha por la tierra, la meta preponderante parece ser el establecimiento o la preservación de la producción de pequeñas mercancías, sujetos a las condiciones históricamente específicas que varían de acuerdo con la región, el país y la localidad. Y más allá del modo en que la tierra sea adquirida u ocupada, las relaciones mercantiles casi inexorablemente se esparcen y echan raíz. Al mismo tiempo, la pequeña producción de bienes implica una existencia muy inestable, con eventuales descensos a la clase de los sin tierra y de los proletarios desposeídos. Irónicamente, la mejor defensa de la pequeña producción de bienes es su combinación con ingresos de afuera del campo, bien de un empleo asalariado o de un

negocio propio. Con la migración laboral global, la pequeña producción de bienes toma dos rutas: el grupo familiar deja la agricultura definitivamente (desprendiéndose de la tierra, que será usada por otro agricultor campesino o capitalista), o evoluciona hacia un cultivo familiar capitalizado y se convierte en un pequeño capitalista y empleador de trabajo rural.

Consecuentemente, las luchas por la tierra y sus resultados son entendidos mejor en el contexto más amplio de las múltiples y contradictorias posiciones de clase ocupadas por diversos miembros del grupo familiar campesino, lo que da lugar a un proceso altamente complicado y estructurante de diferenciación de clase. La estabilidad y la aparente permanencia de formas híbridas de trabajo nacional y transnacional encapsulan la estructural “fragmentación del trabajo” que caracteriza al capitalismo contemporáneo (Bernstein, 2002: 453). Las relaciones directamente globalizadas convierten en redundante la clásica cuestión agraria definida en términos nacionales. No obstante, los contextos específicos requieren sus propias respuestas y soluciones. Algunos aspectos del neoliberalismo, como la integración global del trabajo, pueden ser beneficiosos para ciertos productores rurales, pero no para otros; alternan y expanden los ejes de lucha y, en todo caso, requieren alguna forma de transición fundamental como condición previa para la transformación agraria (Kay, 2002). En una situación de caos económico y complejidad no explicitada, el imperativo moral de compartir la tierra con los necesitados parece ser el único impulso unificador, y estimula a las ONG y a los burócratas a apoyar y a organizar ocupaciones de tierras. El sueño neopopulista de apoyar económicamente la producción en pequeña escala no está, en última instancia, disociado de un populismo moralmente fundamentado. La política de la lucha por la tierra no puede distanciarse de esta necesidad; tampoco debemos olvidar que cada lucha es parcial. Necesitamos aprender de los campesinos que encuentran y sacan provecho de las grietas.

BIBLIOGRAFÍA

- Abelardo, Ma. Theresa 1997 “Land Tenure Improvement in the PECURIA Estate” en *Making Agrarian Reform Work: Securing the Gains of Land Tenure Improvement* (Quezon City: Philippine Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas [PhilDHRR]).
- Aguilar, Filomeno, Jr. 1989 “The Philippine Peasant as Capitalist: Beyond the Categories of Ideal-Typical Capitalism” en *Journal of Peasant Studies*, 17(1), pp 41-67.
- Aguilar, Filomeno, Jr. 1992 “Pitfalls of Theory and Evidence of Practice: Notes on Land Reform as a Populist Ideal” en *Philippine Sociological Review*, 40, pp 1-23.

- Aguilar, Filomeno, Jr. 1998 *Clash of Spirits: The History of Power and Sugar Planter Hegemony on a Visayan Island* (Honolulu y Quezon City: University of Hawaii Press and Ateneo de Manila University Press).
- Aguilar, Filomeno, Jr. 2002 *Filipinos in Global Migrations: At Home in the World* (Quezon City: Philippine Migration Research Network y Philippine Social Science Council).
- Aguilar, Filomeno, Jr. 2003 "Global Migrations, Old Forms of Labor, and New Transborder Class Relations" en *Tonan Ajia Kenkyu (Southeast Asian Studies)*, 41(2), pp 137-161.
- Battistella, Graziano y Paganoni, Anthony (eds.) 1996 *Asian Women in Migration* (Quezon City: Scalabrini Migration Center).
- Bautista, Cynthia B. 1989 "The Saudi Connection: Agrarian Change in a Pampangan Village, 1977-1984" en Hart, Gillian, Turton, Andrew y White, Benjamin (eds.) *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia* (Berkeley, Los Angeles y Oxford: University of California Press).
- Beasca, Joel y Borrero, Ted 2003 *An Evaluation of the Upland Resource Management and People's Development Assistance Project of the Upland NGO Assistance Committee (UNAC)* (Quezon City: Optima Management and Development).
- Bernstein, Henry 1981 "Concepts for the Analysis of Contemporary Peasantries" en Galli, Rosemary (ed.) *The Political Economy of Rural Development: Peasants, International Capital, and the State*, (Albany, NY: State University of New York Press).
- Bernstein, Henry 2002 "Land Reform: Taking a Long(er) View" en *Journal of Agrarian Change*, 2(4), pp 433-463.
- Cabanes, Leonora 1997 "Land Tenure Improvement in the PAICOR Estate" en *Making Agrarian Reform Work: Securing the Gains of Land Tenure Improvement* (Quezon City: Philippine Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas [PhilDHRRA]).
- Chin, Christine B.N. 1998 *In Service and Servitude: Foreign Female Domestic Workers and the Malaysian "Modernity" Project* (New York: Columbia University Press).
- Constable, Nicole 1997 *Maid to Order in Hong Kong: Stories of Filipina Workers* (Ithaca, NY y London: Cornell University Press).
- Cooke, Fadzilah Majid 1999 *The Challenge of Sustainable Forests: Forest Resource Policy in Malaysia, 1970-1995* (St. Leonards, NSW y Honolulu: Allen & Unwin and University of Hawaii Press).
- Cruz, Ma. Concepcion, Zosa-Feranil, Imelda y Goce, Cristeta 1988 "Population Pressure and Migration: Implications for Upland

- Development in the Philippines” en *Journal of Philippine Development*, 15(1), pp 15-46.
- Fukui, Seiichi 1995 “The Role of Land Pawning in Securing Loans: The Case of *Sangla* in the Philippines” en *Developing Economies*, 33(4), pp 397-409.
- Fuwa, Nobuhiko 1996 “Social Stratification and Mobility in a Pangasinan Barrio, 1962-1994” en *Pilipinas*, 26 (primavera), pp 33-66.
- Ghate, P.B. 1988 “Informal Credit Markets in Asian Developing Countries” en *Asian Development Review*, 6(1), pp 64-85.
- Kanok Rerkasem 1996 “Population Pressure and Agrobiodiversity in Marginal Areas of Northern Thailand” en Uitto, Juha I. y Oho, Akiko (eds.) *Population, Land Management, and Environmental Change: UNU Global Environmental Forum IV* (Tokyo: United Nations University Press).
- Kay, Cristóbal 2002 “Chile’s Neoliberal Agrarian Transformation and the Peasantry”, en *Journal of Agrarian Change*, 2(4), pp 464-501.
- Kerkvliet, Benedict 1995 “Village–State Relations in Vietnam: The Effect of Everyday Politics”, en *Journal of Asian Studies*, 54(2), pp 396-418.
- Kerkvliet, Benedict Tria y Selden, Mark 1998 “Agrarian Transformations in China and Vietnam” en *China Journal*, julio, 40, pp 37-58.
- Kitching, Gavin 1998 “The Revenge of the Peasant? The Collapse of Large-Scale Russian Agriculture and the Role of the Peasant ‘Private Plot’ in that Collapse, 1991–97” en *Journal of Peasant Studies* 26(1): 43–81.
- Kratoska, Paul 1985 “The Peripatetic Peasant and Land Tenure in British Malaya” en *Journal of Southeast Asian Studies*, 16(1), pp 16-43.
- Kung, James K.S. y Putterman, Louis 1997 “China’s Collectivisation Puzzle: A New Resolution” en *Journal of Development Studies*, 33(6), pp 741-63.
- Mapalad Agrarian Reform Monitor* 1998 “The Mapalad Hunger Strike and Agrarian Reform” en *Mapalad Agrarian Reform Monitor*, enero, pp 1-7.
- Nagarajan, Geetha, David, Cristina y Meyer, Richard 1992 “Informal Finance through Land Pawning Contracts: Evidence from the Philippines” en *Journal of Development Studies*, 29(1), pp 93-107.
- Otsuka, Naoki 2002 “Land-use Rights and Its Transfer in Changing Vietnam: A Case Study at Mekong Delta Region” en Umehara, Hiromitsu (ed.) *Agrarian Transformation and Areal Differentiation in Globalizing Southeast Asia* (Tokyo: Rikkyo University Centre for

- Asian Area Studies).
- Peluso, Nancy 1992 *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java* (Berkeley: University of California Press).
- Poffenberger, Mark (ed.) 1999 *Communities and Forest Management in Southeast Asia* (Berkeley, CA y Gland: Asia Forest Network and IUCN–World Conservation Union).
- Popkin, Samuel 1979 *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam* (Berkeley, Los Angeles y London: University of California Press).
- Rawal, Vikas 2001 “Agrarian Reform and Land Markets: A Study of Land Transactions in Two Villages of West Bengal, 1977–1995” en *Economic Development and Cultural Change*, 49(3), pp 611-630.
- Rigg, Jonathan 2002 “Land and Livelihoods in Southeast Asia: Breaking the Bond?” en Umehara, Hiromitsu (ed.) *Agrarian Transformation and Areal Differentiation in Globalizing Southeast Asia* (Tokyo: Rikkyo University Centre for Asian Area Studies).
- Scott, James 1976 *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (New Haven, CT y London: Yale University Press).
- Scott, James 1985 *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven, CT y London: Yale University Press).
- Turton, Andrew 1989 “Local Powers and Rural Differentiation” en Hart, Gillian Turton, Andrew y White, Benjamin (eds.) *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia* (Berkeley, Los Angeles y Oxford: University of California Press).
- Weyland, Petra 1993 *Inside the Third World Village* (New York: Routledge).
- World Bank 1989 *Environment and Natural Resources Management Study: A World Bank Country Study – Philippines* (Washington, DC: World Bank Group).